



-000013-

*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

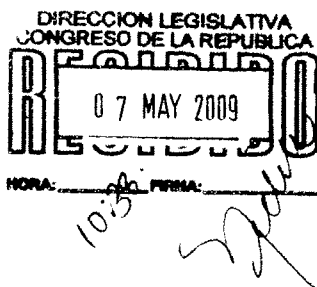
4 de mayo del 2009

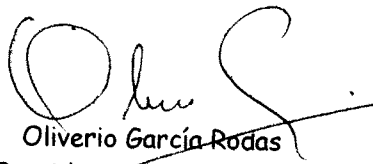
Licenciada  
Ana Isabel Antillón  
Dirección Legislativa  
Congreso de la República  
Su Despacho

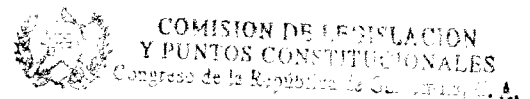
Señora Directora:

De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo regulado en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto el **DICTAMEN FAVORABLE**, emitido en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el día veintisiete del mes de abril del año 2009, a la Iniciativa No. 3944 que dispone **APROBAR REFORMAS AL DECRETO No. 51-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CODIGO PROCESAL PENAL**.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar a la Señora Directora las muestras de mi alta estima.



  
Oliverio García Rodas  
Presidente de la Comisión



cc. arch.



-000014-

*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

**DICTAMEN No.03-2009**

**INICIATIVA 3944**

**REFORMAS AL DECRETO 51-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA  
CÓDIGO PROCESAL PENAL**

**ANTECEDENTES**

La iniciativa 3944 que pretende reformas al Código Procesal Penal (Decreto 51-92), fue presentada el 21 de octubre de 2008 y conocida por el Pleno del Congreso de la República el 3 de noviembre del mismo año, los diputados ponentes de esta iniciativa son los diputados Maura Estrada, Ovidio Monzón, Christian Boussinot, Roberto Alejos Cambara, Rosa Zapeta, Delia Back Alvarado y Mario Taracena Díaz Sol.

**CONTENIDO DE LA INICIATIVA**

La iniciativa en estudio pretende reformar el Código Procesal Penal (Decreto 51-92) en varios aspectos: el primero de ellos al adicionar a los magistrados y al personal auxiliar de la administración de justicia en general a las causas de impedimento, excusa y recusación establecidas en la Ley del Organismo Judicial. De la misma manera pretende modificar el trámite y la competencia para conocer de las excusas y recusaciones, modificando que las recusaciones o cualquier otro incidente para que sea tramitado de conformidad con el artículo 150 bis. del mismo cuerpo legal que también es incorporado por la iniciativa en estudio en el cual se pretende la creación un trámite general de incidentes.

El segundo aspecto que la iniciativa pretende modificar es la incorporación del procedimiento en caso de declaración por medio audiovisual, adicionado el artículo 218 Ter. Al Código Procesal Penal. En este sentido también se pretende la incorporación de la declaración del Perito a través de video conferencia o cualquier otro medio audiovisual similar.

En conclusión la iniciativa busca en cierta forma incorporar métodos más ágiles y eficaces en el proceso penal.



## Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

Congreso de la República  
Guatemala, C.A.

### DE LAS CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL

La Constitución Política de la República establece que: *"Es deber del Estado garantizarle a a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona"*, adicionalmente a esto, establece que: *"...Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido"*. Este marco constitucional es el amparo jurídico, político e ideológico del proceso contemplado en el Código Procesal Penal. En este sentido la Corte de Constitucionalidad en el expediente 974-2004 en sentencia del dieciséis de noviembre del mismo año considera que: *"...en casos anteriores, que el derecho de defensa y el principio del debido proceso enunciados en el artículo 12 constitucional, consisten en la observancia por parte del tribunal, de todas las normas relativas a la tramitación del juicio y el derecho de las partes de obtener un pronunciamiento que ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre que entraña el procedimiento judicial..."*.

En igual sentido el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos establece que: *"Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil..."*, si esto se complementa con el principio de continuidad establecido en el código procesal penal. De esta manera es determinante la coexistencia de las garantías penales y procesales, sin embargo para llegar a su cumplimiento efectivo dentro del Estado de Derecho se deben establecer formas ágiles y mas fidedignas de llevar a cabo el proceso penal.

### CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

En 1994 entró en vigencia en Guatemala el primer código procesal penal basado en la propuesta modelo para Iberoamérica, después de este le siguieron la reforma procesal en materia penal en el resto de países centroamericanos. De esa manera el Código Procesal Penal guatemalteco se constituyó como un ejemplo a seguir para muchos países latinoamericanos. A pesar de esto, uno de los principales problemas que surge durante la implementación del mismo, es la mentalidad tradicional y poco innovadora por parte de los abogados litigantes y administradores de justicia.



000016-

## *Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

De allí que las principales innovaciones, que constituyen un reto de transformación cultural y administrativa de la justicia penal, lo constituyen: a) el verdadero establecimiento de un juicio oral y público, con inmediatez, concentración y contradictorio; b) transformación de mecanismos preparatorios del juicio, modificación de funciones del Ministerio Público, ampliando la participación de la víctima y redefiniendo el papel de la policía; c) una profunda modificación al régimen de acción pública, permitiendo la reparación de la víctima, la no revictimización, criterios de selección, salidas alternativas y fórmulas conciliatorias, proponiendo una mejor solución al conflicto. Sin embargo uno de los mayores retos transversales de cualquier modificación y de la posibilidad de éxito de la justicia pasa por la búsqueda de nuevos mecanismos de control de duración del proceso que permitan la materialización de una justicia pronta y cumplida; y por supuesto la simplificación de las fórmulas y trámites del procedimiento, acentuando el carácter adversarial, otorgando preeminencia a los problemas sustanciales antes que los mecanismos burocráticos.

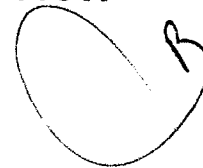
A pesar de que en materia procesal penal, se reconoce que Guatemala ha observado en su legislación un cambio trascendental en el sistema de la justicia, al instaurar el sistema acusatorio básicamente, respetuoso por esencia de derechos y garantías fundamentales, en contraposición al sistema inquisitivo que se aplicaba anteriormente, que vulneraba los más elementales derechos de las personas al debido proceso. De esta forma el Código Procesal Penal Vigente, constituye uno de los más grandes ejemplos del avance en la administración de justicia, sin embargo existen formas más adecuadas de poder registrar y llevar el proceso penal de mejor manera.

Una de las formas de registrar y llevar el proceso penal, lo constituye el modelo de gestión por audiencias implementado por la Corte Suprema de Justicia en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Quiché, Baja Verapaz, Chiquimula, Jutiapa y Huehuetenango; realizado bajo el amparo del Reglamento Interior de Juzgados y Tribunales Penales, emitido mediante el Acuerdo No. 24-2005 de la Corte Suprema de Justicia, convirtiéndose en una política institucional de la Corte Suprema de Justicia para combatir la burocracia en el procedimiento penal y el engorroso papeleo de tribunales. Sin embargo esto no se ha podido implementar en toda la República, entre otras cosas a causa de la falta de regulación por parte del Congreso de la República en el tema.

Es importante mencionar que bajo la estructura actual y la perspectiva tradicional del quehacer judicial, los oficiales de trámite son, como su nombre lo indica, quienes dan trámite a las causas que les son asignadas de manera proporcional y aleatoria, evidenciándose de esta manera la delegación de funciones jurisdiccionales a la figura del auxiliar judicial. En el mejor de los casos, cuando las partes presentan sus peticiones ante el juez, el oficial de



-000017-



## *Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República  
Guatemala, C.A.*

trámite, debido al resabio cultural del registro escrito elabora un acta "integral" de las actuaciones procesales y de lo que allí se manifiesta, produciendo un retraso al momento de dictar las pretensiones y corriendo el riesgo de que no sean tomadas de forma fidedigna.

Muchas veces han sido éstos los motivos causantes o cómplices de la impunidad y lentitud que se le atribuye al sistema de Justicia. Ya que se ha identificado plenamente que en el ordenamiento jurídico guatemalteco, existen normas y mecanismos que requieren modificaciones para mejorar por una parte, los derechos garantizados en la Constitución Política de la República de Guatemala; y, por la otra, para remover obstáculos y llenar vacíos legales que actualmente son utilizados como mecanismos eficaces para lograr impunidad.

Sin embargo, en el plano normativo, para una verdadera defensa de los derechos de las personas y para una aplicación efectiva del sistema acusatorio, se requiere de una serie de reformas a la normativa procesal, que de una u otra manera, deberían ser aplicadas durante la tramitación de un proceso penal. A pesar de ello, dicho cuerpo normativo no ha sido objeto de modificaciones sustanciales y necesarias, razón por la cual en la práctica, en el proceso penal confluyen normas que pertenecen a dos visiones o sistemas procesales distintos: el primero de ellos el acusatorio y el segundo de ellos lo constituyen los resabios del inquisitivo, lo que ha contribuido a la dilación y obstaculización en la tramitación del proceso penal; y, en alguna medida a que prevalezca la situación de impunidad para la mayoría de autores de hechos criminales.

Otros de los problemas que afronta directamente el sistema procesal penal guatemalteco son: la falta de confianza de la población en general hacia las instituciones responsables de la administración de justicia; los altos niveles de corrupción e infiltración del crimen organizado y narcotráfico en las instituciones estatales; la falta de resultados efectivos en las investigaciones penales, pero principalmente la gran cantidad de testigos, peritos y otras personas vinculadas a los procesos, amenazadas o asesinadas, ha originado la no intervención o colaboración en hechos delictivos de personas que conocen y pueden aportar a la investigación, pero no lo hacen por temor a represalias en contra de su vida o la de sus familias. Esto se agrava por la capacidad casi inexistente de las instituciones públicas, para crear o implementar mecanismos para la protección de personas amenazadas o que son objeto de hechos contra su vida o integridad por la participación en procesos judiciales.

Uno de los más grandes ejemplos de la eficiencia de un modelo avanzado de gestión judicial es el caso de la implementación del modelo de gestión por audiencias en los juzgados y tribunales penales, ya que ha producido avances significativos en la administración de justicia; particularmente, en las etapas previas al debate. Entre los avances del modelo por audiencias



-000018-

## *Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

podemos mencionar: que los jueces y juezas, actualmente, ejercen a plenitud –y sin delegación alguna– la potestad constitucional de juzgar, a través del contacto directo con las partes afectadas, quienes de viva voz expresan, ante aquellos, sus problemas, sus angustias, sus limitaciones, sus preguntas, sus respuestas y su versión de los hechos, su autodefensa, esperando así obtener una respuesta justa a sus peticiones; consecuentemente, se mejora la calidad de las resoluciones jurisdiccionales dictadas en audiencia. Además, se ha mejorado el acceso a los tribunales mediante un eficiente servicio administrativo, con matices de un despacho judicial corporativo, incrementando la calidad en la atención al público, dejando atrás la cultura del engorroso trámite del expediente.

Asimismo, debe incluirse como parte de esta exitosa experiencia del modelo por audiencias; la reducción de la carga de trabajo del personal auxiliar del despacho judicial, en tanto se suprime la delegación de la función jurisdiccional en la figura del auxiliar judicial, y; el cúmulo de notificaciones y citaciones se reduce como resultado de las notificaciones hechas en audiencia.

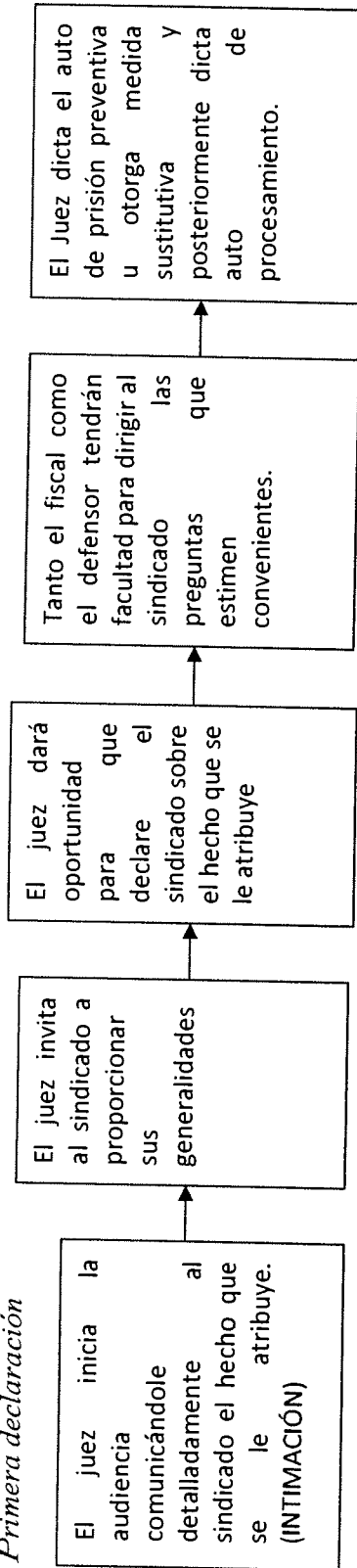
La mejora en la organización de los expedientes o carpetas judiciales es otro de los avances, debido a que se eliminan los expedientes voluminosos por una carpeta judicial que contiene: las actas sucintas de las actuaciones procesales, un registro en medio digital de las resoluciones dictadas en audiencia (CD), como otras diligencias que por ley se exigen de forma escrita, siendo la excepción a la regla. Por otra parte, la transparencia de todos los actos procesales realizados de cara al pueblo, es un factor que mejora la percepción del usuario sobre el sistema de justicia. También lo es el cumplimiento real de los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad.



## PROCESO PENAL

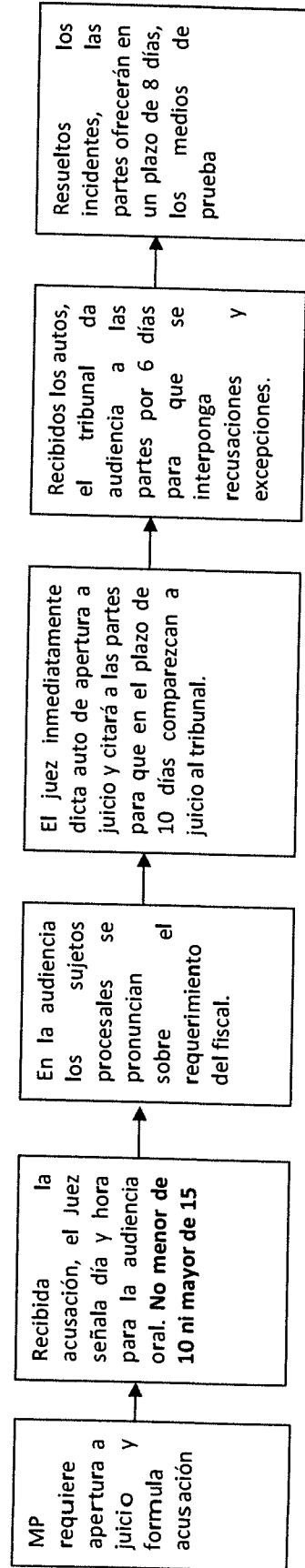
### 1. Proceso penal vigente

#### a) Primera declaración



1. El Juez realiza la INTIMACIÓN, lo que contradice el modelo acusatorio, pues es el fiscal quien debería presentar los cargos
2. El Juez podrá dirigir preguntas después de la declaración del sindicado, lo que contradice el modelo
3. La declaración del sindicado debe constar en acta, y es leída cuando finaliza la audiencia
4. El querellante solo puede asistir a la audiencia si el sindicado da su anuencia, lo que limita los derechos de la víctima
5. Si se dicta prisión preventiva, la fase de instrucción tendrá una duración de 3 meses, si no fue así, durará 6 meses

#### b) Procedimiento Intermedio

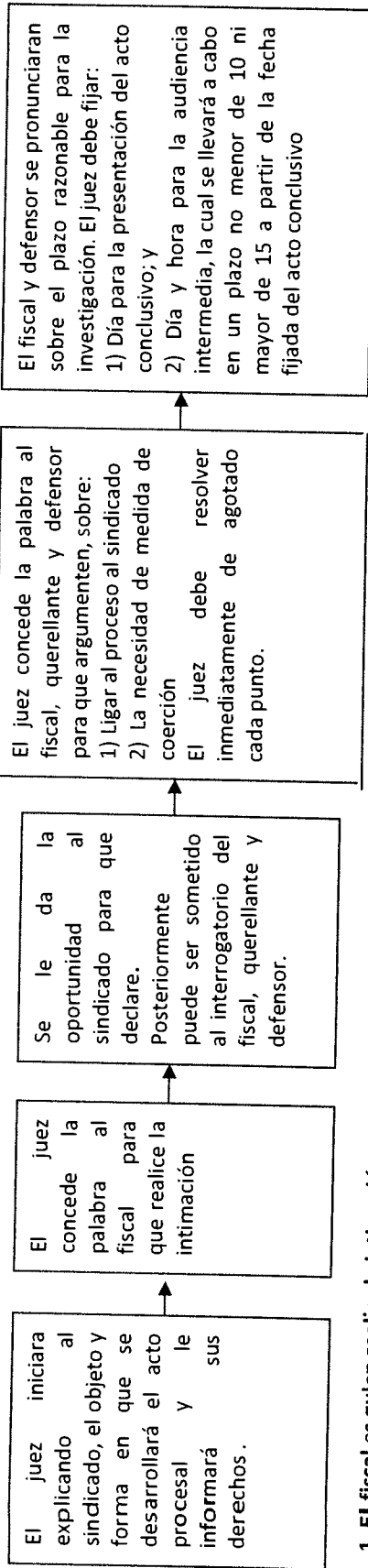


1. Las partes ofrecen medios de prueba ante tribunal de sentencia, lo cual contamina la objetividad del tribunal en el debate
2. En la práctica el plazo desde la apertura a juicio y el inicio del debate es de 382 días.



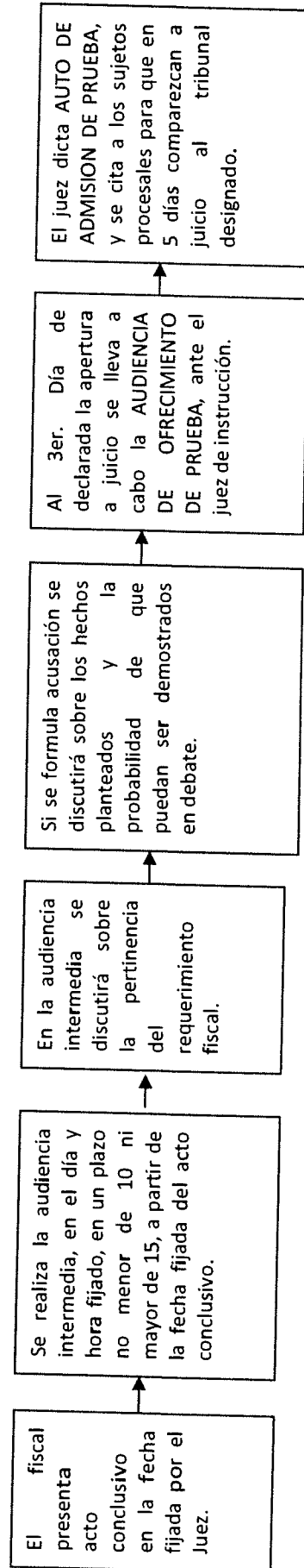
## 2. Proceso penal con reformas

### a) Primera declaración



1. El fiscal es quien realiza la intimación
2. El juez ya no tiene intervención en el interrogatorio, únicamente lo modera
3. El juez emite en primer lugar el auto de procesamiento, y posteriormente, si se liga a proceso al sindicado, resuelve la medida de coerción
4. El querellante tiene la facultad de intervenir en todas las audiencias
5. El plazo de la Investigación puede acortarse dependiendo de la gravedad del caso y de las partes

### b) Procedimiento Intermedio



1. Los sujetos procesales ofrecen medios de prueba ante el juez de instrucción
2. Si se solicita Clausura Provisional, el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que se realizará la nueva audiencia Intermedia



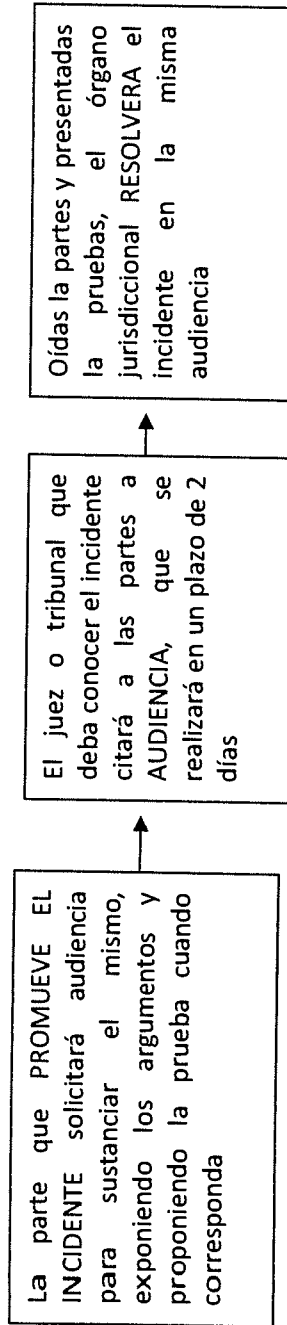


## Procedimiento de Incidentes:

### 1. Vigente

- En la fase de instrucción e intermedia, el código procesal penal no regula un procedimiento de incidentes específico, y el que se aplica es el que regula la Ley del Organismo Judicial.
- En el debate, existe la norma contempla que todas las cuestiones incidentales que se pudieran suscitar serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna. Se le concede la palabra por única vez, por el tiempo que establezca el presidente, a todas las partes procesales.

### 2. Con reformas





-000022-

*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República  
Guatemala, C.A.*


En este sentido y bajo los argumentos anteriormente vertidos se establece la necesidad de reformar el Código Procesal Penal a fin de garantizar generar un proceso más ágil que pueda responder de forma efectiva a las necesidades de justicia pronta y cumplida de la población guatemalteca, así como garantizar mayor eficiencia y eficacia en la protección de los derechos y garantías para los implicados.

**DICTAMEN**

En base a las consideraciones Constitucionales, Legales y Políticas vertidas anteriormente, esta Comisión emite **DICTAMEN FAVORABLE** a la iniciativa 3944 de reformas al Código Procesal Penal Decreto 51-92 del Congreso de la República, por ser un Proyecto de Decreto Oportuno, Conveniente y Constitucional.

**DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS  
CONSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA  
VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE.**

  
**Oliverio García Rodas**  
Presidente

  
**Rodolfo Aníbal García Hernández**  
Vicepresidente

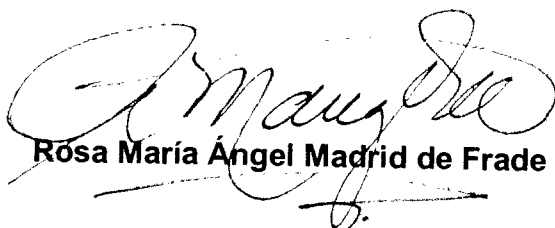
  
**José Alberto Gándara Torrebiarte**  
Secretario



-000023-

*Comisión de Legislación y  
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

  
Rosa María Ángel Madrid de Frade

  
Francisco José Contreras Contreras

  
Héctor Alfredo Nuila Ericastilla

Carlos Enrique López Girón

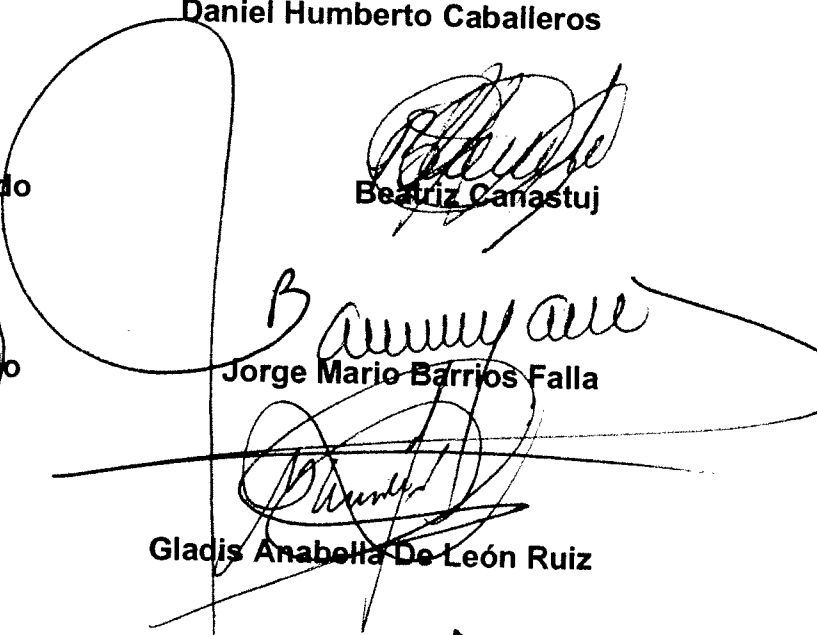
César Augusto Del Águila López

Daniel Humberto Caballeros

Carlos Valentín Gramajo Maldonado

  
Beatriz Canastuj

  
José Alejandro De León Maldonado

  
Jorge Mario Barrios Falla

Félix Ovidio Monzón Pedroza

  
Gladis Anabella De León Ruiz

  
Mariano Rayo Muñoz

  
Ronnie Danilo Escobar

  
Oscar Valentín Leal

  
Rosa Elvira Zapeta

**DECRETO NÚMERO:** \_\_\_\_\_

**EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA**

**CONSIDERANDO:**

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin supremo el bien común y que además, es deber del Estado: garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona humana.

**CONSIDERANDO:**

Que es necesario adecuar el texto del Código Procesal Penal, especialmente cuando se aplican otras leyes que lo complementan en materia de incidentes y de lograr órganos de prueba de peritos, testigos y otras personas, garantizando ciertos beneficios que coadyuvarán a la eficacia en la Administración de Justicia, estableciendo normas claras, precisas y concretas de aplicación por los órganos jurisdiccionales y los responsables de la persecución penal.

**CONSIDERANDO**

Que es necesario el establecimiento de mecanismos, para hacer prevalecer los principios de celeridad, oralidad, inmediación, publicidad, contradictorio y debido proceso, promoviendo que el procedimiento sea transparente, breve, concreto y desprovisto de formalismos innecesarios y reglas poco realistas.

**POR TANTO:**

En ejercicio de las Atribuciones que le confiere la literal a) del Artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala,

**DECRETA:**

Las siguientes:

**“REFORMAS AL CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO 51-92 DEL  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA”**

**Artículo 1.** Se reforma el artículo 66 del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:



**“Artículo 66. Competencia y Trámite.** La competencia de los impedimentos, excusas y recusaciones, se regulará por lo establecido en la Ley del Organismo Judicial.

El trámite de los impedimentos y excusas se regulará por lo establecido en la Ley del Organismo Judicial.

Las recusaciones y los incidentes que no sean de los señalados en el párrafo anterior, serán tramitados de conformidad al artículo 150 Bis. de este Código.”.

**Artículo 2.** Se reforma el artículo 81 del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

**“Artículo 81. Advertencias Preliminares.** Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado, con palabras sencillas y claras, el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Así mismo le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quienes vive, de las cuales depende o están bajo su guarda.

En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio el Juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir, antes de comenzar la declaración sobre el hecho.”

**Artículo 3.** Se reforma el artículo 82 del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

**“Artículo 82. Desarrollo.** La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente:

1. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables, y descripción de los elementos de convicción existentes.
2. Si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente.

3. Después de declarar, el sindicato puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor.
4. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata.
5. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor, para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata.
6. El fiscal y defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de diez (10) días ni mayor de quince (15) días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten, y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia.
7. El querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia a continuación del fiscal. Las partes no podrán oponerse a la presencia del querellante en la misma.”

**Artículo 4.** Se deroga el artículo 83 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República.

**Artículo 5.** Se deroga el artículo 84, del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República.

**Artículo 6.** Se reforma el artículo 109 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

**“Artículo 109. Peticiones.** El Ministerio Público, al igual que los demás sujetos procesales, harán todos los requerimientos en audiencia oral, unilateral o bilateral según sea el caso, debiendo ser claros y concisos, demostrando y argumentando su pretensión.

El requerimiento de audiencia se podrá hacer de la forma más expedita, utilizando para el efecto el teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro medio que lo facilite. El juez o tribunal certificará lo conducente a donde corresponda cuando el fiscal, en forma injustificada, no asista a las audiencias.”

**Artículo 7.** Se reforma el artículo 117 del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

**“Artículo 117. Agraviado.** Este código denomina agraviado:

1. A la víctima afectada por la comisión del delito.
2. Al cónyuge, a los padres y a los hijos de la víctima y a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito.
3. A los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen; y
4. A las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses.

El agraviado, aún cuando no se haya constituido como querellante adhesivo de conformidad con el presente código, tiene derecho a:

- a. Ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal.
- b. Recibir asistencia médica, psico-social, o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo.
- c. Que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican clausura o extinción de la persecución penal.
- d. A ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales, e invitado a las audiencias en las que su opinión pueda ser vertida.
- f. A recibir resarcimiento y/o reparación por los daños recibidos
- g. A recibir protección cuando su integridad física corra peligro como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado
- h. A que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal.

El Ministerio Público, estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo para el efecto realizar convenios con instituciones públicas o privadas.”.

**Artículo 8.** Se reforma el artículo 146 del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

**“Artículo 146. Registro de las actuaciones.** Cuando uno o varios actos deban ser documentados, el funcionario que los practique, asistido por su secretario, levantará el acta correspondiente, en la forma que prescribe este código.

Las audiencias orales, unilaterales o bilaterales, podrán ser grabadas en formato de audio y/o video, o cualquier otra forma de registro que garantice su fidelidad. Los asistentes administrativos serán los encargados de archivar adecuadamente las grabaciones, y entregarán copia digital de la misma a los intervinientes, sea física o virtualmente.

**Artículo 9.** Se adiciona el artículo 150 Bis., al Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

**“Artículo 150 Bis. Trámite general de los incidentes.** Cuando se promueva un incidente para el cual este Código no señale un procedimiento específico, se procederá de la forma siguiente:

La parte que promueve el incidente solicitará una audiencia para sustanciar el mismo, exponiendo los argumentos que fundamentan su petición y proponiendo e individualizando la prueba cuando se refiera a cuestiones de hecho. El incidente que sea promovido sin cumplir con los requisitos anteriores será rechazado. El juez o tribunal que deba conocer del incidente citará al imputado, al Ministerio Público y a las demás partes, a una audiencia que deberá realizarse dentro del plazo máximo de dos (2) días en el caso de que se trate de cuestiones de derecho y cinco (5) días en el caso de que sea cuestiones de hecho.

Oídas las partes y, en su caso, recibidas las pruebas, el órgano jurisdiccional en la audiencia respectiva, resolverá el incidente sin más trámite”.

**Artículo 10.** Se reforma el artículo 160 del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

**“Artículo 160. Comunicación.** Toda decisión jurisdiccional se tendrá por comunicada en el momento de la audiencia oral en que se emita, sin necesidad de acto posterior alguno.

Las citaciones y convocatorias a audiencias se podrán realizar de la forma más expedita, sea por teléfono, fax, correo electrónico u otra forma que facilite y asegure la realización de la audiencia.”.

**Artículo 11.** Se reforma el segundo párrafo del artículo 202 del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:



“Si existiere duda acerca de la tenencia, posesión o dominio sobre una cosa o documento, para entregarlo en depósito o devolverlo, se instruirá un incidente separado”.

**Artículo 12.** Se deroga el artículo 335 del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas.

**Artículo 13.** Se reforma el artículo 340 del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

**“Artículo 340. Audiencia.** La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal.

En caso de formularse acusación se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate.

El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público.

En caso de solicitarse la Clausura Provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que deba realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento como lo establece el artículo 82 de este código.

En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos.”.

**Artículo 14.** Se adiciona el artículo 343 del Código Procesal Penal, Decreto Número 1-92 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

**“Artículo 343. Ofrecimiento de Prueba.** Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno, con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar.

Ofrecida la prueba se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto.

De igual forma se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal.”.

**Artículo 15.** Se reforma el artículo 344 del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“**Artículo 344. Citación a juicio.** Al dictar el auto que admita o rechace la prueba, el juez citará a los sujetos procesales, para que, en el plazo común de cinco días comparezcan a juicio al tribunal designado y constituyan lugar para recibir notificaciones. Si el juicio se realizare en un lugar distinto al del procedimiento intermedio del plazo de citación se prolongará cinco días más.”.

**Artículo 16.** Se deroga el Capítulo III del Título II, del Libro Segundo, del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas.

**Artículo 17.** Se deroga el artículo 345 Bis. del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas.

**Artículo 18.** Se deroga el artículo 345 Ter. del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas.

**Artículo 19.** Se deroga el artículo 345 Quáter. del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas.

**Artículo 20.** Se reforma el artículo 346 del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“**Artículo 346. Audiencia.** Recibidos los autos, la unidad administrativa del tribunal fijará el día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de diez (10) días ni mayor de quince (15) días.

Dentro de este plazo, el tribunal podrá ordenar a pedido de parte, recibir declaración a los órganos de prueba que, por algún obstáculo difícil de superar, se presume que no podrán concurrir al debate; adelantar las operaciones periciales necesarias para informar en él; o llevar a cabo los actos probatorios que fueran difícil de cumplir en la audiencia o que no admitieren dilación. En estos casos se podrá diligenciar el anticipo de prueba mediante videoconferencia u otro medio electrónico en las condiciones que lo regulan los artículos 317 y 318 de este código.

Dentro de los cinco (5) días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal, la cual deberá realizarse dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud. Si alguno

de los jueces considera que incurre en motivo de excusa lo invocará en el mismo plazo, para el efecto se convocará a audiencia a todos los intervinientes.”

**Artículo 21.** Se deroga el artículo 347 del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas.

**Artículo 22.** Se deroga el artículo 348 del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas.

**Artículo 23.** Se deroga el artículo 350 del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas.

**Artículo 24.** Se deroga el artículo 351 del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas.

**Artículo 25.** Se deroga el artículo 352, del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus reformas.

**Artículo 26. Derogatoria.** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan o contravengan las normas de la presente ley.

**Artículo 27. Vigencia.** La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

**PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN**

**DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, DE DOS MIL OCHO.**

